

Ética y responsabilidad en la crisis

(cómo pensar este tiempo de pandemia)

Adriana Boria - Alicia Servetto
(coordinadoras)

Colección Libros
Debates, pensadores y problemas socioculturales



**Ética y responsabilidad en la crisis
(cómo pensar este tiempo de pandemia)**

Colección Libros

Debates, pensadores y problemas socioculturales



Ética y responsabilidad en la crisis: cómo pensar este tiempo de pandemia /
Waldo Ansaldi ... [et al.]; compilación de Adriana Boria; Alicia Servetto. - 1ª ed.
- Córdoba: Centro de Estudios Avanzados.

Centro de Estudios Avanzados, 2021.

Libro digital, PDF - (Libros - Debates, pensadores y problemas socioculturales)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-1751-97-6

1. Ética. 2. Pandemias. 3. Ciencias Sociales y Humanidades. I. Ansaldi, Waldo.
II. Boria, Adriana, comp. III. Servetto, Alicia, comp.
CDD 303.401

Universidad Nacional de Córdoba

Rector: Dr. Hugo Oscar Juri

Vicerrector: Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira

Decana de Facultad de Ciencias Sociales: Mgter. María Inés Peralta

Editorial del Centro de Estudios Avanzados

Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 153, 5000, Córdoba, Argentina

Directora: Adriana Boria

Coordinación Ejecutiva: Alicia Servetto

Coordinación Editorial: Mariú Biain

Comité Académico de la Editorial

M. Mónica Ghirardi

Daniela Monje

Alicia Servetto

Alicia Vaggione

Juan José Vagni

Coordinador Académico del CEA-FCS: Alejandra Martin

Coordinador de Investigación del CEA-FCS: Marcelo Casarin

Asesora externa: Pampa Arán

Diagramación de Libro: Fernando Félix Ferreyra

Corrección: Simón Juan

Responsable de contenido web: Diego Solís



Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 Argentina

© Centro de Estudios Avanzados, 2021

**Ética y responsabilidad en la crisis
(cómo pensar este tiempo de pandemia)**

**Adriana Boria - Alicia Servetto
(coordinadoras)**

Índice

Introducción. Ética y responsabilidad en la crisis (cómo pensar este tiempo de pandemia) <i>Adriana Boria y Alicia Servetto</i>	9
Volveré y seré millones abriendo las grandes alamedas <i>Waldo Ansaldo</i>	15
Pandemias de ayer y hoy. Reflexiones histórico-demográficas <i>Cecilia Moreyra, Leandro M. González, Adrián Carbonetti y Bruno Ribotta</i>	37
La post pandemia y los posibles escenarios globales <i>Carlos Juárez Centeno y Gonzalo Ghiggino</i>	53
Pensar la teoría política en contexto de pandemia: discutir el significado del poder del Estado y sus efectos políticos <i>María Teresa Piñero</i>	67
Opinodemia: ¿discursos del saber o del creer? <i>María Teresa Dalmasso</i>	79
Cuidar, cocinar, limpiar. Transitar hacia la muerte en tiempos de covid-19 <i>Alejandra Ciriza</i>	95
Tiempos de destiempos: Experiencias, reflexiones y desafíos sobre la educación en pandemia <i>Silvia Servetto</i>	101

Prevención, promoción y protocolos: reflexiones éticas sobre estrategias médicas <i>Darío Sandrone</i>	113
Retrososos ante la pandemia del coronavirus. Supervivencia y justicia. Ecofeminismo como ética del cuidado <i>Patricia Morey</i>	129
El covid-19 y la sociedad mundial: aproximación a un cambio de paradigma en las ciencias sociales <i>Esteban Torres</i>	151
Pensar la crisis desde la comunicación, la cultura y la ciudadanía: agenda académica y política para la acción <i>Daniela Monje, Liliana Córdoba, Valeria Meirovich, Susana Morales, Magdalena Doyle y Santiago Martínez Luque</i>	167
De los autores	185

Volveré y seré millones abriendo las grandes alamedas

Waldo Ansaldi

A Rebeca Ávila, garota das cores.

A mí sólo me matareis, pero mañana volveré y seré millones.

Julián Apaza (Túpac Katari), 15 de noviembre de 1781

*Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde,
se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre
para construir una sociedad mejor.*

Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973

Este breve análisis de coyuntura en curso comprende las seis semanas que van desde el domingo 18 de octubre al lunes 30 de noviembre de 2020. La primera fecha es insoslayable, obligada; la segunda, arbitraria, definida por el límite para concluir la redacción del artículo y enviarlo a la editora. En ese lapso se produjeron algunos hechos que pueden ser orgánicos, o solo ocasionales, para emplear la distinción gramsciana. Como es obvio, se trata de un análisis incompleto, pues el proceso está en curso. Adicionalmente, lo que no es un dato menor, entre la finalización del artículo y su publicación mediará un tiempo que puede –o no– dar respuesta a algunos de los interrogantes planteados en la coyuntura.

En esos 43 días se produjeron varios acontecimientos destacados en América Latina, de los cuales, por razones de espacio, analizaré someramente solo cinco.

Volveré y seré millones

Lo proclamó primero Túpac Katari en el entonces Alto Perú. Alrededor de un siglo y medio después, en Argentina lo repitieron José María Castiñeira de Dios y Eva Duarte, Evita. Recientemente, con más legitimidad, fue reiterado por Evo Morales. Como pocos, él sí puede hacer alarde de semejante retorno.

El domingo 18 de octubre, con una participación superior al 88 % del padrón (similar al de 2019) la ciudadanía boliviana se expidió de manera contundente: el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo en primera vuelta 55 % (3.400.000, en números redondos) de votos que consagraron la elección de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vice para el quinquenio 2020-2025. Triunfo rotundo –mayor que el obtenido un año antes–, como derrota rotunda de la burguesía y sus opciones de derechas golpistas y antidemocráticas.

Dentro del reducido margen espacial concedido para esta colaboración, sintetizar los aspectos nodales de ese triunfo electoral no es sencillo, corriéndose el riesgo de soslayar cuestiones importantes. Asumo el riesgo y señalo tres aspectos que me parecen relevantes.

Primero: el Movimiento al Socialismo (MAS) supo crear hegemonía, en el estricto sentido conceptual gramsciano. No es un dato menor. Brevemente dicho: cuando el Gobierno perdió el referéndum del 21 de febrero de 2016 –en el cual el 51 % de la ciudadanía votó «No» a la reelección de Evo Morales-Álvaro García Linera–, dos posiciones se desplegaron en la política boliviana: la convicción de la burguesía y las derechas del ocaso del masismo, y el desarrollo del error estratégico del Gobierno de forzar la voluntad popular mediante la disposición del Tribunal Constitucional, que a fines de 2017 habilitó la posibilidad de una nueva reelección. El resultado del referéndum fue una derrota del Gobierno y un triunfo del proyecto democratizador que el MAS había impulsado desde sus inicios. Al parecer muy pocos –si no nadie–, supieron leerlo así y al hacerlo al revés creyeron y actuaron en consecuencia. La vigencia del proyecto transformador y el apoyo que tiene de la mayoría de la población, básicamente indígena, tuvo una ratificación contundente.

Empero, frente al avance de las derechas, las elecciones de 2019 no dejaban margen de dudas para las clases populares y el binomio Morales-García Linera obtuvo, legítimamente (como se probó luego) 47% de los votos, superando por el ajustado 10,5% la diferencia que, al no haber superado el 50%, lo habilitaba constitucionalmente. La burguesía y las derechas, con el apoyo del imperialismo norteamericano y el vergonzoso accionar del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un renegado del Frente Amplio uruguayo, apelaron al procedimiento históricamente preferido: el golpe de Estado. Fracasaron estrepitosamente con la gestión gubernamental corrupta y represora de Jeanine Áñez, con el adicional de un pésimo manejo de la estrategia de combate al covid-19. Justamente, en esa batalla se produjo un hecho significativo: la compra, a cuatro veces su precio de lista, de cien respiradores españoles inservibles para terapia intensiva. Hubo muchos que tomaron debida nota.

Porque supo crear hegemonía, pese a todos los reparos que puedan hacerse a su gestión y al abandono de las posiciones más progresistas cuando no radicales, el MAS logró que la evidente movilidad social ascendente no ocluyera las conciencias de clase, de pertenencia étnica y de género. Pero ello debe tomarse con cuidado, pues es evidente que aquellos que habían ascendido socialmente bajo el gobierno masista a lo largo de 14 años, descendieron, se reempobrecieron abruptamente por efecto del covid-19 y el mal manejo que de la pandemia hizo la gestión usurpadora de Áñez, y aspiran a recuperar posiciones.

Segundo: históricamente, Bolivia se ha caracterizado por tener un Estado débil y una sociedad civil fuerte, relación asimétrica que se afianzó desde la Guerra del Chaco (1932-1935), clave para entender la Revolución Nacional de 1952. Dentro de esa fortaleza, dos «casamatas» han sido decisivas: la Confederación Obrera Boliviana (COB) y muy particularmente la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). No por azar, una patota asesino a Orlando Gutiérrez, joven dirigente de esta, pocos días después del triunfo electoral. Según algunos, podría haber sido el ministro de Trabajo del Gobierno de Arce, pero el dato, incluso siendo cierto, pierde contundencia frente al significado simbólico del asesinato, del asesinato y de los asesinatos.

Organizaciones clave de la sociedad civil boliviana lo han sido nuevamente, en primer lugar las sindicales y las campesinas. Ellas resistieron y sortearon al menos tres violencias que la usurpación de derecha les descargó a lo largo de un año: la económica, que golpeó duramente a las clases populares (unos 3200000 de bolivianas y bolivianos no tenían recursos suficientes para reproducir la vida material); la material o física, ejercida por la policía y el Ejército, como en los casos de Sacaba y Senkata, y la simbólica, dentro de la cual la más agresiva fue la quema de la wiphala. El sociólogo Julio Córdova Villazón añade una cuarta: la electoral, expresada en el escamoteo del triunfo del MAS en las elecciones de 2019.

Tercero: la burguesía y sus expresiones políticas de derecha han sido vencidas electoralmente, pero conservan harto poder económico, cultural (impregnado del tradicional racismo de las clases dominantes del país) y uno político no desdeñable en el Oriente, donde se ha hecho fuerte Luis Fernando Camacho, un fundamentalista religioso que jugó un papel clave en el golpe de Estado. Líder en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, se postuló para presidente, obteniendo solo 14 % de los votos a nivel nacional, pero claro ganador en su departamento, único presidenciable de las derechas con poder territorial y un político decidido a seguir dando batalla contra las clases populares. Convendría no subestimarlos. Ya dio muestras de lo que está dispuesto a hacer.

Contra viento y covid, Chile decidió acabar con el legado del dictador

La imagen del joven chileno enarbolando en las calles de Santiago un cartel de factura casera con ese texto me parece una excelente síntesis de lo que posiblemente ocurrirá en 2021-2022, de no mediar algún artilugio de la derecha.

El domingo 18 de octubre la ciudadanía chilena se manifestó de manera contundente en el plebiscito que el Gobierno de Sebastián Piñera demoró largamente so pretexto de la pandemia del covid-19. El 78 % de la ciudadanía votó por la reforma de la Constitución pinochetista y el 79 % lo hizo por el mecanismo de una Convención

Constituyente integrada exclusivamente por el voto de la ciudadanía. Ese demoledor resultado –derrota fenomenal de la derecha– ha generado exultantes comentarios y manifestaciones, celebración merecida, sin duda, pero que conviene matizar (y no poco). Más significativo que los guarismos del triunfo democrático-popular es el nivel de participación ciudadana.

Por la ley 20.568, de enero de 2012, el voto dejó de ser obligatorio y pasó a ser optativo. Desde entonces, los niveles de abstención han sido elevados (alrededor del 50 %). En el plebiscito reciente, la participación ascendió a casi el 51%, la más alta desde aquella ley. Aunque se la ha argüido, la pandemia del covid no es responsable de la inasistencia del 49%. Tampoco los Carabineros en las calles por disposición gubernamental. En las elecciones de 2017, la participación llegó al 47 % en la primera vuelta y al 49 % en la segunda (exactamente a la inversa del 25 de octubre). Convengamos que no hay mucha diferencia. Se ha alegado, con razón, que tan elevado nivel de abstenciones en sucesivas elecciones da cuenta del rechazo a la política o, al menos, a una forma de hacer política y a los propios partidos tal como hoy existen y actúan. Un éxito del llamado neoliberalismo fue licuar la condición de ciudadano en la de mero elector y más puntualmente en la de elector abstencionista. Las derechas, los neoliberales y similares odian la política y prefieren la «meritocracia». La odian porque, para decirlo una vez más, ella es un ámbito de libertad por excelencia: la de elegir seguir viviendo como vivimos, o cambiar las condiciones de vida. El abstencionismo a menudo solo es dejar las cosas como están, cualquiera sea la excusa o el «argumento» para justificarlo.

Los resultados del plebiscito permiten algunas primeras conclusiones significativas. La primera es el contenido de clase de la votación. Chile tiene 346 comunas: el Rechazo ganó en solo 5, pero estas lo dicen todo: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Antártida y Colchane. Las tres primeras corresponden a Santiago y son el *locus* de burgueses y ricos; la Antártida es una base militar, pero para quebradero de cabeza de nuestros colegas trasandinos, en la comuna de Colchane, en Tarapacá, mayoritariamente aymara, el Rechazo fue abrumador, llegando ¡al 74 %! En las comunas predominantemente obreras, el porcentaje de Apruebo osciló entre 80 y 90. No extraña

en las regiones del norte, con su larga historia sindical y política (¡cómo olvidar Santa María de Iquique!). Sorprendió Chiloé, tradicionalmente de derecha, votando Apruebo. Un dato relevante es el acrecentamiento de la combatividad obrera, acentuada desde 2019, año en el que las huelgas se incrementaron 68 % respecto de las de 2018.

La segunda conclusión es que el resultado es una consecuencia de las movilizaciones populares de 2019, particularmente, dentro de ellas, la de los jóvenes y la de la clase obrera, con su rica y larga historia combativa. Las lolas (diferente significado que en Argentina) y los lolos, como llaman a les adolescentes –los *pingüinos*– se rebelaron en 2006 contra el sistema educativo pergeñado por la dictadura (Ley Orgánica Constitucional de Educación), rebeldía reavivada en 2011 con la lucha en favor de «una educación pública, libre y gratuita». En 2017 surgió el movimiento No Más AFP (los fondos privados de pensión, que sirvieron de modelo al menemismo en la Argentina de los 90), en 2018, la Rebelión Feminista contra el patriarcado. En 2019, dentro de las masivas movilizaciones de ese año –particularmente la muy decisiva del 18 de octubre–, se produjo el ya señalado repunte de las luchas obreras. Aunque de incidencia tal vez menor, no deben olvidarse las protestas ambientalistas contra mega proyectos energéticos, ni las reivindicaciones de algunas regiones del país frente al tradicional centralismo del mismo. No son datos menores, pues es sabido que cuando una protesta social interpela, demanda al Estado, ella se torna política.

La tercera conclusión significativa es la incógnita del qué hacer. El proceso que culminará con la sanción de una nueva Constitución Política del Estado chileno es largo. Lo ha sido hasta aquí y continuará siéndolo hasta su conclusión formal. He aquí sus hitos. Los pasados son: 15 de noviembre de 2019: Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. 24 de diciembre de 2019: reforma constitucional que modifica la Constitución vigente para incorporar el itinerario y reglas del proceso constituyente. 29 de marzo de 2020: el presidente convoca, vía decreto, al plebiscito a realizarse el 25 de octubre de 2020. Este día, como se ha dicho, se decidió aprobar la propuesta de nueva Constitución y el órgano encargado de redactarla. Los futuros son: 11 de abril de 2021: elección de convencionales

constituyentes; mayo o junio de 2021: instalación de la Convención Constituyente, cuyo plazo para aprobar el nuevo texto puede llegar a 9 meses, pasibles de extenderse hasta 12; aproximadamente 60 días después (agosto de 2022): plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Es decir, alrededor de 21 meses, casi dos años. Otro dato no menor. En el ínterin, el 21 de noviembre de 2021 se realizarán las elecciones presidenciales.

Conforme el resultado de octubre, el 11 de abril de 2021 se decidirá la composición de la Asamblea Constituyente, por primera vez igualitaria en cuanto a género y con representación de los pueblos originarios. Al menos, sí tiene aprobación la resolución de la correspondiente Comisión del Senado que, a instancias de la oposición, dispone adicionar, a los 155 originalmente previstos, 24 convencionales (con paridad de género) representantes de los pueblos originarios, conforme la proporción censal de la población, de donde 14 de ellos deberían ser mapuches, distribuyéndose el resto entre aymaras, rapa nui, kawésqar, yagán, quechua, kolla, atacameña y diaguita. Otro escaño será para un afrodescendiente.

Ahora bien, y esto es lo más importante de la tercera conclusión, en lo que vendrá sabremos si el resultado de octubre puede convertirse en un movimiento orgánico o ser solo un acontecimiento accidental. Una nueva Constitución, por democrática y de avanzada que sea, no será la panacea. Las Constituciones son como los planos de los arquitectos: diseñan lo que se quiere construir, pero, a diferencia de estos, el resultado no es necesariamente el mismo. Claro, una Constitución democrática (y hay que discutir qué se entiende por tal) es preferible a una totalitaria o incluso solo autoritaria, pero no es un demiurgo. En el mejor de los casos, cambia la *forma* del Estado, pero importa más si ella da cuenta, o no, de cambios reales, efectivos en la matriz societal.

Se ha abierto un tiempo de confrontación. El resultado de octubre es para celebrar, pero lo importante está por venir y ahí está la cuestión principal para las clases subalternas, para las clases populares, para las fuerzas y los proyectos transformadores. La derecha burguesa chilena, históricamente fuerte, fue derrotada en el plebiscito, pero no debe olvidarse que retuvo un 21-22 % de apoyos electorales sólidos (digamos, la derecha más dura), que se suman a más o

menos otros tantos que esta vez votaron por la reforma de la Constitución, pero que siguen pensando un país para pocos. Desde la caída de la dictadura, las posiciones de la derecha no han sido menores al 40 % en términos electorales. No es una cifra para desestimar. Más importante es tener presente el poder que detenta en los planos económico, político, financiero, militar y de los medios de comunicación. Cuando Sebastián Piñera, expresó, al comentar el resultado que le fue adverso, que «la Constitución nunca parte de cero, porque representa el encuentro de las generaciones», estaba diciendo que harán todo cuanto les sea posible para impedir una auténtica transformación en la organización política –no en la social– del país. Pinochet está muerto, pero sus ideas siguen gozando de muy buena salud.

A diferencia de Bolivia, la organización y la fortaleza políticas de las fuerzas populares, particularmente las de izquierda, que parecen renacer, son hoy débiles o, en el mejor de los casos, no suficientemente sólidas. Construir una y otra no será fácil. Es deseable y, sobre todo, esperable, que les dé la talla.

Perú: se metieron con la generación equivocada

En las manifestaciones de noviembre de 2020 en las calles limeñas, una joven portaba un cartel proclamando «¡Se metieron con la generación equivocada!» La generación en cuestión está siendo llamada «la del Bicentenario», en alusión al de la declaración de la independencia.

En breve: el 9 de noviembre, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, de derecha, bajo el cargo de «incapacidad moral permanente», resultante de su aceptación de sobornos. Dato no menor: 68 de los 130 diputados están procesados, cuando no acusados, de hechos de corrupción. No extraña que, como en Argentina en 2001 y en Ecuador en 2005, se levantara la consigna «¡Que se vayan todos!».

El 10, el presidente del Legislativo, Manuel Merino, de Acción Popular, el partido fundado por Fernando Belaunde Terry en

1956, fue designado en reemplazo de Vizcarra, mientras en las calles crecían y ganaban fuerza las movilizaciones contra el «golpe institucional» –mas no en favor del mandatario depuesto–, demandando convocatoria a elecciones y a un proceso constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, bajo el gobierno neoliberal de Alberto Fujimori. Las protestas continuaron durante varios días, siendo brutalmente reprimidas, de donde el saldo de dos jóvenes (24 y 22 años) asesinados, 94 heridos (de los cuales 63 fueron hospitalizados), detenciones arbitrarias, desaparición de 42 personas y agresiones a periodistas nacionales y extranjeros, todo por acción de la Policía Nacional del Perú (PNP). La imagen de dos muchachas marchando en una de las movilizaciones con las tetas al aire y pintadas en sus torsos las leyendas «PNP tortura» y «PNP violadora» en gruesas y negras letras mayúsculas es de una elocuencia simbólica notable, tanto del empoderamiento de las mujeres cuanto de los jóvenes en la coyuntura.

El 15, esas manifestaciones callejeras y la presión de grupos de interés llevaron, tras un frustrado intento de designar Presidenta de la República a Verónica Mendoza –del movimiento Nuevo Perú, candidata a ese máximo cargo por la coalición Frente Amplio en las elecciones de 2016 y nuevamente, por la reciente del Frente Político Juntos por el Cambio para las de abril de 2021– a la renuncia de Merino y a su reemplazo por Francisco Rafael Sagasti, un ingeniero industrial de 76 años, parlamentario por el Partido Morado, una novel organización política (2017) que se autodenomina «centro republicano radical» (*¡sí!*). En 1996 Sagasti fue una de las personas que se encontraban en la embajada de Japón cuando esta fue tomada por un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Cuando se terminan de escribir estas líneas, está formando su gabinete.

Toda coyuntura, para decirlo una vez más, solo se explica en la mediana y en la larga duración, a la que no es ajeno el coeficiente histórico de una sociedad. La peruana está fragmentada, históricamente, en tres grandes regiones la Costa (dominante), la Sierra (las montañas andinas, *locus* del sistema de haciendas) y la Selva amazónica (área de extractivismo minero y petrolero, vendida en más de 70 % a empresas multinacionales). En esas regiones, usualmente

ocupadas militarmente, los pueblos originarios son objeto de sistemáticas persecuciones, acentuadas bajo el gobierno de Vizcarra aprovechando la pandemia del covid-19.

En la mediana duración –unos 30 años, en este caso–, la actual crisis política encuentra claves explicativas desplegadas a partir del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y el consiguiente ejercicio del poder de manera abusiva, incluyendo altos niveles de corrupción y la persistencia del terrorismo de Estado, a cuya cabeza se encontraba Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Consejero de Seguridad del Gobierno y principal asesor presidencial entre 1990 y 2000. Fue pieza fundamental en la ejecución del terrorismo de Estado en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Va de suyo que su posicionamiento político fue la negación absoluta del significado de los nombres que le pusieron sus padres.

En 1993, la dictadura fujimorista promulgó una nueva Constitución, hecha a la medida de las políticas del Consenso de Washington, permisiva del saqueo de los recursos naturales y atentatoria de los derechos. En noviembre de 2000, en un contexto de escándalos de corrupción que involucraban a funcionarios de su gobierno y encontrándose de gira en Japón (país del cual tiene nacionalidad) envió su renuncia, la cual fue rechazada por el Congreso que, en cambio, lo destituyó bajo el cargo de «incapacidad moral». En noviembre de 2005 fue detenido en Chile y extraditado a Perú en septiembre de 2007, siendo condenado por una serie de delitos que le fueron imputados –entre ellos el de responsabilidad intelectual en el asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), crímenes ejecutados por el llamado Grupo Colina, un escuadrón del Ejército– con suma de penas de prisión. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó en diciembre de 2017, pero en octubre de 2018 el Poder Judicial ordenó al presidente Vizcarra anular dicho indulto, por lo cual volvió a prisión. No obstante, el movimiento político que inspiró, el llamado fujimorismo, continúa siendo una fuerza política importante bajo la conducción de la hija del dictador, Keiko, jefa de Fuerza Popular, el último nombre de esa agrupación política de derecha autoritaria.

Tras la deposición de Fujimori, Perú vivió una secuencia de presidentes que debieron enfrentar cargos por hechos de corrupción, a pesar de la complacencia del sistema judicial: Alejandro Toledo (2001-2005, actualmente en libertad bajo fianza en Estados Unidos), Alan García (2006-2011, suicidado en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por vinculaciones con el denominado caso Odebrecht), Ollanta Humala (2011-2016, detenido preventivamente en 2017 acusado de lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita para delinquir en el Caso *Lava Jato*: actualmente está siendo investigado bajo comparecencia restringida), Pedro Pablo Kuczynski (2016-marzo 2018, fecha ésta en la que renunció acusado de corrupción, actualmente en espera de juzgamiento). Martín Vizcarra, su sucesor, asumió el cargo proclamando su intención de luchar contra la corrupción, aunque terminó envuelto en acusaciones de practicarla. Es un dato relevante: en todos los países, las fuerzas de derecha acusan a sus oponentes, sobre todo si están ejerciendo el gobierno y son más o menos «progresistas», de corruptas, acusaciones que a veces tienen algún componente de verdad, pero que todas las veces terminan siendo práctica de esas derechas, a menudo más intensamente.

Vizcarra gobernó desde el comienzo de su gestión en favor del gran capital. La pandemia del covid-19 le vino como anillo al dedo para llevar adelante una política aún más favorable al mismo y más brutalmente antipopular, como lo prueban las medidas tomadas para satisfacer las demandas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), una organización de la gran burguesía creada en 1984, destinando a ella el 70 % de la ayuda gubernamental, autorizando la suspensión sin pago de sueldos de trabajadores, a los cuales, por añadidura, se les recortó el derecho a destajo (se paga según lo producido, no según las horas trabajadas). Todo ello mientras se disparaban el desempleo y las muertes por covid-19. Acotación al margen, pero significativa: en 2019 la CONFIEP estuvo involucrada, junto a Fuerza Popular en un controversial caso de aporte económico por más de 3 millones de dólares para apoyar la campaña electoral de Keiko Fujimori.

Adicionalmente, y ello explica el accionar policial, Vizcarra dispuso en abril pasado, con el «argumento» de la «paz social» y la

posibilidad de rebeldía popular, garantías de impunidad policial por el uso en servicio de armas de fuego en ocasión de «disturbios». *Ergo*: la policía reprimió como lo hizo porque una disposición presidencial le autorizaba hacerlo. Todo eso bajo la vigencia del estado de excepción, la militarización del país y la suspensión de las garantías constitucionales so pretexto de combatir a la pandemia. El decreto del Estado de Emergencia y cuarentena a nivel nacional, dado a conocer el 15 de marzo, y el toque de queda dispuesto tres días después obraron en esa dirección.

La política sanitaria llevada adelante por el gobierno de Vizcarra fue un fracaso monumental. El sistema hospitalario colapsó y las cifras de afectados son aterradoras. Perú tiene una población de 32.625.948. Al 31 de octubre, según el Ministerio de Salud, se habían registrado 902.503 casos, con 34.474 fallecidos, esto es, 27,66 casos por cada 1.000 habitantes y un índice de letalidad de 3,8 %. Pero según las cifras de las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud, los casos eran 1.414.762, las muertes, 45.894, 4.339 casos por mil habitantes y un índice de letalidad de 3,24 %. Incluso tomando las cifras menores, el impacto ha sido, es, terrible.

La apretadísima síntesis precedente explica la más que justificada demanda «¡Que se vayan todos!». Un ejercicio comparativo, que no podemos realizar aquí, pondría de manifiesto que tiene mayor fundamento y causa que en Argentina 2001 y Ecuador 2005. Extraña sí, y será necesario explicarlo, que haya demorado tanto en ser formulada.

Está claro que la crisis peruana se suelda, como en todas partes, con la crisis mundial del capitalismo potenciada por la pandemia, pero le añade un proceso treintañal de degradación de la política, que no es un fenómeno exclusivamente peruano y remite, para decirlo otra vez, a la concepción neoliberal de negar –bajo la expresión antipolítica– la función liberadora que potencialmente tiene la política. Por cierto, los partidos no han hecho mucho, cuando lo han hecho, para devolverle a la política su grandeza y su dignidad.

Es claro que Perú vive una crisis de Estado, que las movilizaciones, espontáneas y masivas, se iniciaron contra el golpe de Estado parlamentario, no en defensa del presidente destituido, y por los derechos democráticos, y que en ellas el protagonismo fundamental

ha sido el de la juventud, que en menos de una semana alteraron el orden político de una manera todavía difícil de mensurar y cuya resolución dependerá de muchos factores, entre los cuales la organización de las clases populares no es el menor. También en Perú, la protesta social devino política al interpelar al Estado. La resolución política dependerá, en buena medida, de si dichas clases construyen la organización capaz de liderar el proceso. La demanda de convocatoria a una Asamblea Constituyente que derogue la Carta fujimorista de 1993 y promulgue una que dé cuenta de las demandas democráticas y elimine las casamatas neoliberales, puede encauzar el proceso, pero siempre y cuando se tenga claro que la letra de una Constitución no alcanza, menos aun no existiendo una situación pre revolucionaria como en la Rusia zarista de 1917. En Perú, como en Chile, las fuerzas populares deberían estar atentas y vigilantes, pues también en el país andino la burguesía y sus expresiones políticas de derecha son fuertes y no van a resignar sus privilegios fácilmente ante las demandas de lo que la esposa de Sebastián Piñera calificó de alienígenas.

La «generación del bicentenario» o, si se prefiere, los jóvenes de la generación Z o posmilénica o centúrica (*centennial*), autoconvocados, salieron a las calles enarbolando su indignación ante tanta corrupción, ante la captura del Estado por una clase rapaz y por ende ausencia de democracia participativa y contra la represión. Lo hicieron utilizando algunas de las nuevas formas de hacer política: empleo de los celulares, convocatoria a través de las redes sociales, utilización de aplicaciones como Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp. Pero también, por ejemplo, organizando brigadas para dar atención médica a los heridos y legal a los detenidos. Las cámaras de los celulares permitieron registrar visualmente tanto las manifestaciones como la represión y se viralizaron en vivo y directo unas y otra. Para algunos analistas, como Omar Coronel, un científico social de la Pontificia Universidad Católica, se trata de «la campaña de protesta más grande en la historia del Perú». No estuvieron solos: la mayoría de la población, parte de la cual –especialmente de la clase de ingresos medios– se sumó a las movilizaciones y/o las apoyan. Una encuesta de Ipsos le atribuye un 86 % de adhesión.

Brasileños: no sean maricas

El *Partido dos Trabalhadores* (PT) ganó sucesivas elecciones hasta 2018, pero no pudo y/o no supo –tal vez incluso no quiso– construir hegemonía. La manifestación más visible de esa ausencia fueron las elecciones que ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro aquel año, como los pobres resultados en las recientes elecciones municipales. Los que, en una gran encuesta, reconocieron que su condición de vida había mejorado ostensiblemente durante los gobiernos petistas, al responder a la pregunta explicativa de tal ascenso, la respuesta abrumadoramente mayoritaria fue: *Graças a Deus*. La religiosidad popular es y ha sido históricamente un núcleo duro de las culturas políticas del país, pero siendo una clave explicativa importante, lo es menos que la constatación de un enunciado sociológico revalidado con frecuencia: la movilidad social ascendente oculta la conciencia de clase. Pero no siempre es así, como lo demuestra el caso de Bolivia arriba señalado.

El 15 (aniversario de la proclamación de la República) y el 29 de noviembre de 2020 tuvieron lugar las elecciones municipales en todo el país, obviamente en el contexto de la pandemia del covid-19, con un dato agravante: Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de afectados (6.314.740) y el segundo en el de muertos (más de 172.833), en momentos de las elecciones. El presidente Bolsonaro, que minimizó la gravedad de la pandemia y llamó maricas a quienes tomaron cuenta de ella, se resistió a llevar adelante una campaña sanitaria efectiva y cuando el Supremo Tribunal Federal –equivalente en Argentina a la Corte Suprema de Justicia de la Nación– delegó en los prefectos las decisiones en la materia, su reacción fue que al país «no le faltó un líder, sino que le faltó dejar a un líder trabajar». Incluso, contra su intención, la justicia electoral debió obligarlo a usar barbijo para poder sufragar.

En Brasil el voto es obligatorio y se emite de manera electrónica. En la ocasión, 147.625.767 electores/as debían designar *prefeitos* (prefectos, alcaldes, intendentes) *viceprefeitos* y *vereadores* (concejales) en los 5.560 municipios del país. Pretendientes no faltaban: 518.300 para concejales, 19.300 para prefectos. Otro dato no me-

nor: 6.700 militares activos o retirados y policías se postularon como candidatos.

El nivel de abstención fue considerable: 23 % en la primera vuelta, 29,5 % en la segunda, con picos muy altos en las ciudades más importantes, tales como en la segunda vuelta en Río de Janeiro (35,5 %) y São Paulo (31 %). En los comicios de 2014, 2016 y 2018, en los que no había pandemia, la abstención a nivel nacional estuvo alrededor del 21 %, de manera que allí el impacto de la pandemia parece haber sido menor de lo supuesto, no así en ciudades como las citadas, que tienen, efectivamente, números elevados de contagios, los que explican el elevado abstencionismo, el mayor históricamente.

Un indicador de la importancia de la abstención ha sido los casos carioca y paulista. En Río de Janeiro, el vencedor, Eduardo Paes, de derecha, fue superado en la segunda vuelta por el número de electores que no fueron a votar, mientras su oponente, el pastor evangélico bolsonarista Marcelo Crivella, obtuvo casi la mitad de la abstención. Un dato significativo, que puede explicar la magnitud de esta, es que uno y otro de dichos candidatos están señalados como partícipes de hechos de corrupción. En São Paulo, Bruno Covas, de derecha, reelegido como alcalde, venció a la abstención, pero esta superó al candidato oponente, Guilherme Boulos, del nuevo Partido de izquierda Socialismo y Libertad (PSOL).

En apretadísima síntesis: la derecha moderada –lo que en Brasil llaman *centrão*– ha sido la gran vencedora; la extrema derecha bolsonarista (y Jair Bolsonaro en primer lugar), la gran derrotada; la izquierda, en declive respecto del pasado cercano, tuvo altibajos, siendo notable la caída del PT, quizás compensable con las expectativas que abre el PSOL.

Para algunos, la burguesía brasileña ya no necesita a Bolsonaro. Es una posibilidad, pero lo que puede llamarse bolsonarismo está lejos de una situación de debilidad. En opinión de João Paulo Rodrigues, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), no se puede subestimar la fuerza del bolsonarismo, oculto en los otros partidos derechistas. A su juicio, «no se puede subestimar la fuerza del bolsonarismo. Las elecciones demostraron la fuerza del agronegocio en las candidaturas

del centro-oeste de Brasil, incluso en los partidos de centro, pero con un discurso bolsonarista. Hasta 2022, vamos a ver una migración de Bolsonaro hacia los partidos del *centrão*, su reserva política para llegar a un segundo mandato y agredirnos».

Rodrigues fue incisivo en sus declaraciones: «En el contexto de la pandemia, la gente quiere solucionar el problema del hambre y del desempleo. Veo que la izquierda metida en su burbuja de la agenda contra Bolsonaro no logró dialogar acerca de los problemas centrales para el pueblo brasileño». A su juicio, «el debate de un frente amplio [de izquierdas] no puede ocurrir sólo en la segunda vuelta. Donde hubo unidad en la primera vuelta, llegamos con más fuerza en la recta final».

A las 11.58 p.m. del 15 de noviembre, Jair Bolsonaro tuiteó desde su iPhone: «*A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA*». Mirando para otro lado, Bolsonaro no dijo nada de su monumental derrota.

Guatemala: ¿el retorno de la pirolatría maya?

La civilización maya le había asignado al fuego un poderoso valor simbólico: representaba el principio masculino y fecundador del mundo. Era indicador de fin de un ciclo y comienzo de uno nuevo, por lo tanto, articulado con la temporalidad. Cuando se encendía ritualmente renovaba el tiempo, consagraba, purificaba y dotaba de existencia al espacio en el cual se encendía. Esto es: el fuego iniciaba una nueva temporalidad.

Traigo a colación este simbolismo del fuego entre los antiguos mayas –muy bien estudiada por Martha Nájera Coronado– a propósito del incendio parcial del Congreso guatemalteco en la noche del 21 de noviembre en el contexto de las masivas movilizaciones populares antigubernamentales que reclamaban la renuncia del presidente Alejandro Giammattei tras la aprobación parlamentaria del presupuesto para el año 2021, el cual, pese a ser el mayor de la historia del

país (25 % superior al de 2020), no atiende de manera suficiente los gastos en salud, educación, combate a la pobreza y desnutrición infantil, priorizando las partidas destinadas a infraestructura con el sector privado. No pocos analistas habían señalado antes que el mismo agudizará los problemas de una población golpeada por la pérdida de empleos generada por la pandemia».

Según *El Periódico*, «los 18.000 millones de dólares contemplados en los gastos del 2021 están destinados especialmente a financiar el aparato estatal y emprendimientos con el sector privado. El presupuesto no contempla, sin embargo, mejoras para el sistema sanitario ni educativo. Tampoco dedica esfuerzo económico a mitigar los efectos de una desnutrición infantil que azota al 50 % de los niños menores de cinco años».

Por añadidura, el presupuesto aprobado no establece mecanismos de control del uso correcto de los recursos, un dato no menor en un país donde la corrupción está arraigada, y privilegia a ministerios que, como los de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, han recibido denuncias por manejos irregulares de los fondos asignados, es decir, sospecha de hechos de corrupción.

Dos de las objeciones de los manifestantes apuntaban al recorte de los fondos para atender a los enfermos de covid-19 y a las agencias de derechos humanos. Por añadidura, el Congreso votó asignar alrededor de 65000 dólares para comidas de los diputados, al mismo tiempo que recortó 25 millones de dólares para combatir la desnutrición, justo cuando el huracán Iota llegaba al país causando enormes destrozos, entre los cuales inundaciones, deslizamientos de tierras (algunos de los cuales causaron la muerte de 100 indígenas), bloqueos de los caminos, caída de árboles, destrucción de cultivos, corte del suministro de energía eléctrica, incomunicación y desabastecimiento alimentario en las comunidades pobres, ya golpeadas, dos semanas antes, por el precedente huracán Eta, ambos con la secuela de muertos y desaparecidos. Iota (categoría 5) y Eta han sido los dos huracanes atlánticos más fuertes de todo 2020.

El impacto de ambos huracanes ha sido aún mayor por el covid-19, la carencia de medicamentos en los hospitales, el no pago de los salarios de los médicos, el incremento del desempleo y la inflación (sobre todo en alimentos).

En Guatemala, la pandemia registraba, al 29 de noviembre, según las cifras del Ministerio de Salud, 125.352 contagiados y 4.239 muertos. Si bien el Congreso aprobó en su momento partidas para atender la pandemia superiores a 3.800.000.000 de dólares, se estima que apenas el 15 % llegó a quienes necesitaban atención. Se comprende la obviedad de la sospecha de corrupción, o bien de incapacidad de administrarla, si no ambas.

Guatemala es un país con una población estimada en 17.263.000 personas, de las cuales el 60 % vive en la pobreza, siendo la desnutrición de los menores de cinco años del orden del 50 %. La combinación de altos niveles de pobreza, indigencia y ausencia estatal en la atención de los derechos básicos (salud, educación, empleo digno, seguridad) es letal.

Se registra un importante nivel de violencia sexual contra mujeres y niñas, parte de la cual se expresa bajo la forma de prostitución juvenil (se estima en unas 15.000 las menores que la ejercen). Un dato desactualizado, pero no carente de valor, fue el dado a conocer en 2009 por la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes: 70 % de las mujeres en prostíbulos tenía entre 13 y 25 años de edad.

La lucha contra la guerrilla llevada adelante por el Ejército en el período de la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas y el terrorismo de Estado, el más brutal del continente, incluyó un fuerte componente de violencia sexual. Así, por ejemplo, entre 1982 y 1986 15 mujeres de la etnia Q'eqchi fueron convertidas por los militares en esclavas sexuales y obligadas a tener sexo con cinco soldados diariamente.

Étnicamente, la sociedad guatemalteca está conformada, según el Instituto Nacional de Estadística, por los siguientes porcentajes: mestizos, 40; indígenas, 40; blancos, 18; garífunas, 2. La lengua oficial es el castellano, pero el país es multilingüe, pues existen 22 lenguas mayas habladas por un alto porcentaje de la población. Los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996 establecieron la traducción de documentos oficiales y los insumos para las votaciones a varias lenguas mayas.

Lo precedente es una parte del contexto en el cual se desarrollaron las movilizaciones de noviembre, tanto en la capital, Ciudad

de Guatemala, como en otras del país. Las mismas fueron encabezadas, como en Chile y Perú, por jóvenes, mayoritariamente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, de la Universidad de San Carlos. Salieron a las calles con la bandera nacional y pancartas que pedían «No más corrupción», «Fuera Giammattei» y proclamaban, como en Perú, «Se metieron con la generación equivocada». Le reclamaban también al presidente que vetara la ley de presupuesto 2021 y solicitaban la renuncia de 125 de los 160 legisladores, al tiempo que miles de carteles reclamaban una Asamblea Constituyente.

La tarde del sábado 21 hubo, dentro de una gran movilización y protesta masiva y pacífica, un incidente no del todo claro (al menos al cierre de este artículo). Un número indeterminado de personas, vestidas de negro, encapuchadas y portando palos, rompió ventanas del edificio del Congreso y arrojó elementos incendiarios ante la presencia de policías uniformados, que solo comenzaron a actuar cuando el incendio ya estaba declarado. Para algunos, se trató de una típica acción policial: provocar destrozos y acciones violentas para deslegitimar la protesta. Si ello fue así, es obvio que se sospeche que el propio gobierno estuvo detrás.

El vicepresidente Guillermo Castillo señaló posteriormente sus dudas sobre «el incendio y lo sucedido a su alrededor», según informó la prensa, y reclamó una «investigación seria» para esclarecer el hecho, tanto como el «uso excesivo de la fuerza» empleada por la policía para reprimir a los manifestantes pacíficos, no a los incendiarios. Él y Giammattei— un ultraconservador, ex jefe del servicio penitenciario y acérrimo defensor de la pena de muerte— asumieron en enero pasado, y las manifestaciones abrieron una brecha entre ambos, sobre todo cuando Castillo ofreció su renuncia, a condición de que también la presentara el presidente. Al cierre de este artículo (30 de noviembre), no estaba claro qué ocurrirá con ese distanciamiento.

El presidente, por su parte, prefirió enfatizar la defensa de la propiedad pública y privada, la que no debe ser «objeto de vandalismo». Por cierto, nada original. Para defender la propiedad privada, además de apelar a la brutalidad de la violencia policial, se ha criminalizado a defensoras y defensores de derechos humanos en las co-

comunidades indígenas y rurales, y obstaculizado, para decir lo menos, el trabajo de periodistas y comunicadores.

Por otra parte, Giammattei ha pedido la intervención de la Organización de Estados Americanos para establecer un diálogo y abrir una negociación inclusiva que lleve a un entendimiento de la sociedad. En principio, Castillo se opuso a la misma.

Final allegro (es decir, de prisa)

El tiempo y el espacio concedidos se han agotado. Quedan fuera de consideración al menos cuatro procesos en curso en la región, a saber: 1) Colombia, donde las fuerzas de derecha persisten en su histórica costumbre de masacrar a quienes disienten; 2) Venezuela, donde habrá elecciones legislativas el domingo 6 de diciembre; 3) Ecuador, en proceso electoral hacia la elección de Presidente y Vicepresidente el 7 de febrero próximo; 4) Argentina, donde la muerte de «D10S» Maradona ha tenido un fuerte impacto político (merecedor de una nota puntual) y donde la pandemia ha acallado lo que el periodista Walter Medina ha llamado el «genocidio silencioso» del pueblo wichi. También, dos procesos en curso producidos fuera de América Latina, pero que incidirán en ella: 1) el triunfo de Joseph Biden-Kamala Harris en las presidenciales de Estados Unidos, que puede resumirse diciendo tiene otro plumaje, pero sigue siendo águila, y en las que la doble condición de la vicepresidenta electa, afrodescendiente y mujer, queda opacada por su acendrado neoliberalismo; 2) las deliberaciones y resoluciones del 19º Pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino (26-29 de octubre), entre las cuales el 14º Plan Quinquenal (2021-2025), que la Asamblea Popular Nacional aprobará formalmente en marzo de 2021, que definen la opción del país por la estrategia de doble circulación.

En un apretado final diré: 1) en Bolivia, Brasil, Chile y Perú, donde hubo elecciones, perdieron las fuerzas políticas de los gobiernos que trataron mal la pandemia del covid-19. Y donde no hubo, pero sí movilizaciones de masas, como en Guatemala, la estrategia sanitaria gubernamental equivocada también fue rechazada; 2) las movilizaciones y las elecciones han mostrado el empoderamiento de

las mujeres y de los jóvenes, y en cierta medida también el de los pueblos originarios (no solo en Bolivia), aun cuando el machismo en política sigue siendo dominante, especialmente en Brasil, donde es difícil ser mujer y política. 3) Nuevos liderazgos parecen proyectarse en el corto plazo; cuatro de ellos son femeninos: Verónica Mendoza (nacida en 1980) en Perú, Manuel d'Avila (1981) y Marília Arraes (1984) en Brasil, y Beatriz Sánchez (la mayor, 1970), en Chile. Entre los varones, Guilherme Boulos (1982), la esperanza de buena parte de la izquierda brasileña, así como Daniel Jadue (1967) en Chile.